



SUPERINTENDENCIA DEL
SISTEMA FINANCIERO

CIRCULAR

No. DS-20497

San Salvador, 9 de diciembre de 2020

Señores

Presidentes y/o Representantes Legales de Bancos y

Sucursales de Bancos Extranjeros

Presidentes y/o Representantes Legales de Bancos Cooperativos

Presidentes y/o Representantes Legales de Sociedades de Ahorro y Crédito

Presente.

Señor Presidente o Representante Legal:

Hacemos referencia a las circulares SABAO-DAJ-2643, BCS-DAJ-2694 e IEF-DAJ-2740, las primeras dos de fecha 30 de enero de 2017 y la última del 31 del mismo mes y año, relativas al no inicio o terminación de las relaciones comerciales con clientes, socios o asociados.

Sobre el particular, les comunicamos que en función de la misión de esta Superintendencia de velar por la estabilidad del Sistema Financiero y, sobre la base de las competencias de esta Institución, se ha realizado un análisis jurídico respecto al no inicio o terminación de relaciones comerciales, la debida diligencia y las solicitudes de actualización de información efectuadas por las entidades a los clientes, socios o asociados, el cual se detalla en el anexo de la presente comunicación; comprendiendo además las instrucciones que las entidades deberán cumplir respecto a la temática mencionada, las cuales requieren una revisión y actualización de los marcos normativos internos que deberán remitirse a esta Superintendencia en un plazo de 30 días hábiles contados a partir del día hábil siguiente a la recepción de la presente circular.

Por lo anterior, se dejan sin efecto las instrucciones giradas por medio de las circulares SABAO-DAJ-2643, BCS-DAJ-2694 e IEF-DAJ-2740 antes relacionadas.

Atentamente,

Héctor Gustavo Villatoro
Superintendente del Sistema Financiero





SUPERINTENDENCIA DEL
SISTEMA FINANCIERO



**INSTRUCCIONES PARA EL INICIO O TERMINACIÓN DE RELACIONES COMERCIALES
CON CLIENTES, SOCIOS O ASOCIADOS**

I. Antecedentes

Este documento contiene un análisis legal y constitucional realizado por esta Superintendencia, respecto a la prestación de servicios financieros, los cuales incluyen la actividad bancaria relacionada a las cuentas de depósito y el acceso de los clientes, socios o asociados a dichos productos. Es necesario mencionar que el artículo 1 de la Constitución, consagra la actividad del Estado debidamente organizada para la consecución de la justicia, de la seguridad jurídica y del bien común (Amp. 227-2010 y 794-2013). Para cumplir estos fines, la Administración Pública realiza ciertas actividades de interés general, prestándolas directamente o a través de particulares, siempre que éstos cumplan con las condiciones legales preestablecidas. El artículo 111 inciso primero de la Constitución, señala de la misma manera el interés legal y social que poseen los regímenes bancarios y crediticios, constituyendo el acceso a los servicios financieros un derecho fundamental.

La importancia de la labor que desempeñan estas entidades en el sistema financiero, el interés público y la necesidad de permanencia, continuidad, regularidad y generalidad de su labor, indican que la actividad bancaria es indispensablemente un servicio público. Por tanto, nadie puede realizar actividades bancarias, salvo que cuente con autorización previa por parte de la Superintendencia del Sistema Financiero, en relación a los artículos 110 inciso cuarto, 112 y 221 inciso segundo de la Constitución.

Siendo el acceso de los ciudadanos a la actividad bancaria un derecho fundamental y el desarrollo de la misma un servicio público, la libertad de contratación no puede concebirse como absoluta, pues la autorización conferida por esta Superintendencia ha sido dada para brindar un servicio público esencial y por lo mismo, dicho servicio no puede verse interrumpido o cancelado de manera arbitraria en detrimento de los usuarios de dicho servicio, como lo establece el artículo 11 de la Constitución.

Lo anterior, puede afirmarse por las disposiciones de los cuerpos jurídicos internacionales sobre congelamiento y prohibición de manejo de fondos u otros activos de personas y entidades asociadas a actos o grupos terroristas clasificadas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas -CSNU-del cual El Salvador es signatario, a las 40 Recomendaciones del Grupo de Acción Financiero Internacional (GAFI), los estándares bancarios de Basilea, la Ley Contra el Lavado de Dinero y de Activos, su Reglamento y la Ley Especial Contra Actos de Terrorismo.



SUPERINTENDENCIA DEL SISTEMA FINANCIERO

II. Análisis Legal

Esta Superintendencia ha tenido conocimiento que se finalizaron relaciones comerciales bancarias con clientes, socios o asociados, cuando a través de publicaciones en medios de comunicación eran relacionados a actividades ilícitas o al ser catalogados como Personas Políticamente Expuestas, aduciendo las entidades que la continuación de la relación afectaría su reputación comercial y consecuentemente podrían ser objeto de sanción por parte de las autoridades; fundamentando su actuación en los artículos 965 inc. 1º y 1195 del Código de Comercio, así como los artículos 6 de la Ley Contra el Lavado de Dinero y de Activos y 12 de su Reglamento.

La Ley Contra el Lavado de Dinero y de Activos, así como los estándares internacionales antes citados y la recomendación 10 de GAFI y su nota interpretativa, establecen como supuesto para la terminación de las relaciones contractuales de manera unilateral por parte de las entidades o sujetos obligados, cuando el cliente, socio o asociado no proporcione la documentación necesaria para realizar la debida diligencia y el conocimiento del origen de fondos. Este supuesto es recogido actualmente por el artículo 10 literal e) romano II de la Ley Contra el Lavado de Dinero y de Activos. Asimismo, se considera que otro supuesto en que podrán ser terminados los contratos de manera unilateral por parte de los sujetos obligados, será en los casos en que el cliente, socio o asociado haya sido condenado por el cometimiento de los delitos generadores de lavado de dinero señalados en la Ley Contra el Lavado de Dinero y de Activos y la Ley Especial Contra Actos de Terrorismo o, por medidas administrativas dictadas por la Fiscalía General de la República o resoluciones judiciales, en atención a lo que ya dispone el artículo 965 del Código de Comercio de conformidad al artículo 11 de la Constitución de la República.

Debe mencionarse en este punto, que los supuestos para terminar las relaciones comerciales establecidos en el inciso segundo del artículo 9 que contiene la Disposición Especial del Instructivo de la Unidad de Investigación Financiera para la prevención del lavado de dinero y de activos y su apéndice No. 1, exceden lo establecido en el artículo 10 literal e) romano II de la Ley Contra el Lavado de Dinero y de Activos, al contener una presunción de culpabilidad violatoria de los artículos 11 y 12 de la Constitución de la República, otorgándole a un particular la facultad de determinar el posible cometimiento de un delito, por lo cual es inaplicable para la terminación de relaciones comerciales, debido a la inseguridad jurídica en la contratación mercantil y favorecer prácticas anticompetitivas que atentan contra la libertad económica y la fortaleza del sistema económico al bloquear el acceso a servicios financieros. Ello no implica, la desatención a las obligaciones de monitoreo de clientes, socios o asociados y reportes a la Unidad de Investigación Financiera (UIF), así como la verificación de listados actualizados de personas naturales o jurídicas involucradas en delitos relacionados con el Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (LD/FT), provenientes de publicaciones de países u organismos locales e internacionales, así como los listados relacionados con países considerados jurisdicciones de nula o baja imposición fiscal, así como personas naturales o jurídicas vinculadas con actos delictivos, incluido el terrorismo y que desempeñan o han desempeñado



SUPERINTENDENCIA DEL
SISTEMA FINANCIERO



funciones públicas destacadas en el país o el país de origen (PEP's), previo a establecer o iniciar cualquier negocio financiero con clientes, socios o asociados potenciales, a efectos de realizar la debida diligencia ampliada a la que se refieren los estándares internacionales.

Por otra parte, los requerimientos de actualización de información a los clientes, socios o asociados, deben obedecer a razones justificadas, ya sea porque se ha cumplido el plazo para actualizar, establecido conforme al riesgo que representa el cliente, socio o asociado o por algún tipo de operación inconsistente con el perfil que requiera información adicional; por lo cual, no podrán hacerse requerimientos de información de manera antojadiza y sin justificación alguna.

Se reitera que, a la Superintendencia del Sistema Financiero al ser el contralor de la actividad bancaria no le es oponible el secreto bancario, contando con las más amplias competencias para vigilar, fiscalizar, evaluar, controlar e inspeccionar, a todos los integrantes del sistema financiero, sus operaciones activas o pasivas y negocios, información dentro de la cual, se encuentran contenidos datos confidenciales de los clientes, socios o asociados con los cuales las entidades pueden realizar negocios. Cualquier interpretación restrictiva del contenido del artículo 232 de la Ley de Bancos o 143 de la Ley de Bancos Cooperativos y Sociedades de Ahorro y Crédito, desatiende en lo absoluto las reglas de interpretación de la norma que constriñen a atender en forma prioritaria su literalidad cuando el sentido de la ley es claro.

En relación a las circulares giradas por la UIF, la única restricción de información se refiere a los reportes de operaciones sospechosas (ROS), incluyendo los documentos relacionados con los reportes tales como análisis, anexos u otros vinculados con la operación reportada, por lo que a esta Superintendencia no se le puede negar información sobre los cierres de cuenta, únicamente el contenido del ROS y el análisis que llevó a generar el mismo.

III. Instrucciones

Por lo anterior, sobre la base de lo dispuesto en el Art. 3 literales d), i) e inciso penúltimo de la Ley de Supervisión y Regulación del Sistema Financiero y con el objeto de velar por la estabilidad del sistema financiero, debido a que la naturaleza de esas entidades es la captación y colocación de fondos y el cierre de cuentas debe ser una circunstancia excepcional, se instruye:

1. Las relaciones contractuales podrán darse por terminadas o no iniciarse, solo en el caso que el cliente, socio o asociado no presente la información requerida para realizar la debida diligencia o en caso que sea condenado por el cometimiento del delito de lavado de dinero y de activos y de los delitos generadores señalados en la Ley Contra el Lavado de Dinero y de Activos y Ley Especial Contra Actos de Terrorismo. Las resoluciones que provengan de autoridades administrativas o judiciales, en las que se ordene el embargo, cierre, apertura o congelamiento de cuentas, deberán atenderse en el menor tiempo posible.



SUPERINTENDENCIA DEL SISTEMA FINANCIERO

2. No se podrá dar por terminada una relación comercial motivada por la mención de un cliente, socio o asociado en un medio de comunicación masiva o a la existencia de un requerimiento de información realizado por autoridad competente o únicamente por su calidad de Persona Políticamente Expuesta.
3. Previo a establecer una relación comercial, las entidades deberán cumplir con su obligación de verificar los listados actualizados de personas naturales o jurídicas involucradas en delitos relacionados con el Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (LD/FT), provenientes de publicaciones de países u organismos oficiales locales e internacionales, así como los listados relacionados con países considerados jurisdicciones de nula o baja imposición fiscal, personas naturales o jurídicas vinculadas con actos delictivos, incluido el terrorismo y que desempeñan o han desempeñado funciones públicas destacadas en el país o el país de origen (PEP's), a efectos de realizar la debida diligencia ampliada a la que se refieren los estándares internacionales.
4. No podrán realizarse terminaciones de una relación comercial fundamentando dicha decisión en la presunción de culpabilidad establecida en el inciso segundo de la Disposición Especial del artículo 9, del Instructivo de la Unidad de Investigación Financiera para la prevención del lavado de dinero y de activos y su apéndice No. 1
5. Solo podrá requerirse a los clientes, socios o asociados la actualización de información de manera justificada, ya sea porque se ha cumplido el plazo para actualizar establecido conforme al riesgo que representa el cliente, socio o asociado o por algún tipo de operación inconsistente con su perfil que requiera información adicional, concediendo un plazo prudencial para entregar la documentación, acorde al volumen y lo delicado de la información solicitada, el cual no podrá ser menor a 8 días hábiles.
6. En caso se termine una relación comercial por las causas señaladas anteriormente, deberá comunicarse previamente a la UIF conforme lo establece su Instructivo. En ningún caso podrán enviarse a los clientes, socios o asociados con quienes se termine la relación comercial, comunicaciones sin firma, ya que debe existir dentro de la entidad, un ejecutivo debidamente designado que sea responsable por el contenido de las mismas, debiendo consignar el cargo que ostenta.

La Superintendencia podrá verificar el cumplimiento de las presentes instrucciones, para lo cual las entidades deben de considerar las modificaciones de sus políticas y/o procedimientos relacionadas con el Cierre de Cuentas o Terminación de Relación Comercial. Toda infracción a las presentes instrucciones, podrá ser sancionada de conformidad a la Ley de Supervisión y Regulación del Sistema Financiero.